

¿HAN DE CAVAR LAS EMPRESAS SU PROPIA TUMBA?

HENRY GÓMEZ SAMPER

En el artículo «Cómo el capitalismo mata a la democracia», publicado en la edición septiembre-octubre de 2007 de la revista *Foreign Policy*, el profesor Robert Reich realiza la inquietante afirmación de que en los países más adelantados —Estados Unidos, Europa y Japón— el bien común está cediendo ante el apetito desahogado de la gran empresa por conquistar el mercado global. Los resultados están a la vista: cambio climático, desigualdad económica creciente y cada vez menos estabilidad en el trabajo. Tal proceso está siendo aupado por gobiernos ansiosos de mantener el auge económico a toda costa, que socava sus capacidades para responder a las preocupaciones del ciudadano común.

Reich hace hincapié en que no se trata de una falla del capitalismo: «si el propósito del capitalismo es permitirle a las empresas jugar al mercado tan agresivamente como les sea posible, el reto de los ciudadanos es impedir que estos agentes económicos se conviertan en autores de las reglas de acuerdo con las cuales vivimos». Esto implica —en la medida en que, de hecho, esté sacrificándose el bienestar social— que la falla está en la forma como se practica la democracia.

¿Debemos entonces entender que se hacen la vista gorda el cúmulo de organizaciones que operan en los países más adelantados cuyo fin es fortalecer la democracia? ¿Que instituciones de la sociedad civil y otras que auspician la gran empresa, para vislumbrar el futuro de la sociedad y orientar la política empresarial ignoren tal peligro? ¿Que la gran empresa debilita la democracia —el sistema político que mejor se ajusta al capitalismo— y actúa en contra de sus mismos intereses?

Para Reich, el movimiento de responsabilidad social empresarial es una farsa: los políticos alaban a las empresas por actuar «responsablemente»

o las condenan por dejar de hacerlo. Nadie autoriza a los ejecutivos de las empresas a que comprometan ingresos en pro del bien común, ni tampoco cuentan con experiencia en tareas de orden moral que atañen a la sociedad. Tales afirmaciones desestiman el papel que actualmente desempeñan compañías como General Electric en liderar el sector empresarial hacia políticas de largo plazo orientadas, por ejemplo, a detener el cambio climático.

Las posiciones de Reich merecen varias críticas pues, por preocupante que sea la desigualdad de ingresos en los últimos años en los países más adelantados, y por inestables que sean

con sectores de pocos ingresos, sea en calidad de consumidores, proveedores o socios. La inmensa mayoría de la población latinoamericana es pobre. De igual manera, la empresa que opera en América Latina no es ni multinacional ni propiedad de uno u otro grupo económico; pertenece —y pareciera que a muchos les sorprende— a la economía informal, en la que abundan los emprendedores de pocos ingresos ávidos de mejorar sus condiciones de vida.

Vincular la gestión y el inmenso poder económico de las grandes empresas, por un lado, y los sectores de pocos ingresos, por el otro, podría

Trátese de fortalecer la democracia en los países desarrollados o de propiciarla en países como los de América Latina, compete a las empresas asumir —junto con los demás sectores de la sociedad— la responsabilidad de orientar su rumbo

las plazas de trabajo a causa del desplazamiento de la industria manufacturera a otras latitudes, los problemas son mínimos —hasta podríamos decir risibles— si se los compara con las condiciones que imperan en los países atrasados. El futuro de la democracia, de la libre empresa y hasta de la economía global está inmensamente más amenazado por la desigualdad social y la inestabilidad laboral en regiones como América Latina. Porque, ¿existe en la región siquiera un par de países donde se haya profundizado la democracia?

De allí que cobre interés la labor de investigación que actualmente adelantan el IESA y otras escuelas iberoamericanas bajo el paraguas de la Red de Conocimiento sobre Iniciativas Sociales (SEKN, por sus siglas en inglés), cuyo fin es demostrar que es a todas luces factible —aunque ciertamente nada fácil— que las grandes empresas entablen negocios rentables

detonar el potencial de desarrollo económico y social que América Latina exige, si es que no ha de seguir retrocediendo frente a las demás economías del mundo. En buena hora emerge la referida labor de investigación y la divulgación de sus resultados, cuyo financiamiento proviene de empresas responsables, aquellas que, según el profesor Reich, no están autorizadas para destinar recursos a proyectos cuyo fin sea mejorar el futuro de la sociedad.

Trátese de fortalecer la democracia en los países desarrollados o de propiciarla en países como los de América Latina, compete a las empresas asumir —junto con los demás sectores de la sociedad— la responsabilidad de orientar su rumbo. De lo contrario, terminarán por cavar su propia tumba. ■

Henry Gómez Samper
Profesor emérito del IESA